

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Valdivia
CAUSA ROL : C-578-2022
CARATULADO : BRINKMANN/FISCO DE CHILE- MINISTERIO
DE EDUCACION

Valdivia, a veintitrés de diciembre del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Al folio 1, doña **BEATRIZ GUDRUN BRINKMANN SCHEIHING**, C.I. 5.014.902-1, pensionada, domiciliada en Calle Quinchilca N°3000, comuna de Los Lagos, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de Derecho Público, representado por don **NATALIO VODANOVIC SCHNACKE**, abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, ambos con domicilio en calle Independencia N°630 oficina 311 de la comuna de Valdivia, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que expone:

Los Hechos:

Según consta en Informe de Comisión Asesora Presidencial para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, la demandante fue calificada como víctima en el listado de presos políticos y torturados, con el número 3.437, todo lo cual se acredita en estos autos mediante los antecedentes documentales que se acompañarán.

La demandante en forma completa y absolutamente ilegal fue detenida sin causa legal alguna, por agentes del Estado pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones en Valdivia el día 19 de septiembre de 1986, en su domicilio ubicado en calle Los Robles en Isla teja a un costado del Puente Pedro de Valdivia, donde actualmente funciona una estación de servicio, los cuales vestían de civil pero que se movilizaban en un Jeep Militar del Ejército de Chile, allanándose su casa y luego fue trasladada por diversos puntos de la ciudad hasta ser ingresada al Cuartel de la Central Nacional de Informaciones de Valdivia ubicado en Calle Pérez Rosales N°764 de Valdivia, donde actualmente funciona la Casa de la Memoria.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCBXCVMP5X

En ese lugar fue sometida a feroces torturas físicas y psicológicas, incluyendo aplicación de descargas eléctricas y golpes de pies y puños además de simulacros de fusilamiento. Especialmente brutales fueron las aplicaciones reiteradas de electricidad en tobillos y muñecas, seguidos de golpes reiterados en una silla destinada al efecto.

La demandante además de ser torturada, permaneció en el lugar donde otras personas que había sido detenidas en el mismo operativo y eran torturadas, constituyéndose en una terrible tortura psicológica.

La señora Brinkmann permaneció en este centro de tortura entre los días 19 y 24 de septiembre de 1986, fecha en que fue trasladada a la Cárcel de Valdivia donde permaneció encarcelada hasta el 23 de septiembre de 1987.

Según se indica en Informe elaborado por el Programa Prais del Servicio de Salud de Valdivia: *“Posterior a su encarcelamiento de un año, es dejada en libertad con la condición de retornar a Alemania, donde nuevamente se involucra activamente en causas asociadas a DD.HH y solidaridad con Chile, siempre pensando en su retorno, que concreta en 1989”.*

Y concluyendo que: *“Luego de la evaluación psicológica, se concluye la existencia de indicadores de daño en Beatriz”.*

En el aspecto psicológico propiamente tal, presentó varios síntomas, que la han llevado a consultar a especialistas del área de la salud mental, asociados a cuadros de estrés agudo, y depresión, que generan pérdida importante de peso, angustia, tristeza, desmotivación generalizada.

Estuvo en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Estos síntomas, se han presentado en más de una oportunidad a lo largo de su vida, como posible configuración de un estrés post traumático tardío.

Otro de los signos evidentes de las consecuencias de la experiencia de tortura, fue la afonía crónica, que se presentó por estrés agudo.

Doña Beatriz manifiesta que, ha consultado especialistas de la Fonoaudiología, quienes apoyaron el proceso de recuperación parcial de la voz, pero que no regresó a tener la fortaleza de antes. Efectivamente su voz es de bajo tono e indica que, una de las explicaciones que se le dieron por expertos, es que la musculatura que trabaja para que las cuerdas bucales de



expandan y contraigan y generen el sonido, sufrieron el impacto, y no responden de la manera que debiesen. Esto se presentó siendo joven, por lo que otra de las consecuencias se relaciona con el proyecto de vida.

Doña Beatriz se proyectaba como docente, se había especializado en la materia y es hasta el día de hoy, una de sus pasiones. Este proyecto vital se vio mermado producto de la afonía de carácter psicógena, que coartó su desarrollo y cumplimiento del plan por el cual había trabajado y estudiado. Sólo puede ejercer en grupos pequeños o de lo contrario, su voz no es escuchada.

Su familia, también sufrió el impacto emocional y social, de haber sido privada de libertad, pues son excluidos de los grupos de pares con los que tenían relación y sentido de pertenencia, además, luego de su liberación, debe irse a Alemania, vivenciando nuevamente la distancia física con su grupo familiar nuclear.

El 23 de septiembre de 1987, en una señal de lo arbitrario e ilegal del procedimiento penal al cual fue sometida, la demandante fue puesta en libertad en la Cárcel de Valdivia. En la entrada de la Cárcel la esperaba su abogado don Juan Concha Urbina y el Primer Secretario de la Embajada de Alemania en Chile, la libertad se le concedió bajo la condición de dejar inmediatamente el país con destino a Alemania, ello atendida su calidad de ciudadana alemana, todo lo cual había transformado la detención de la demandante, en un incidente internacional de gran resonancia en la época y de mucha incomodidad para la dictadura militar.

El año 1989 y cuando la Sra. Beatriz se encontraba en Alemania, fue condenada por la Justicia Militar a la pena de un año de privación de libertad, periodo coincidente con el tiempo que había estado detenida o en prisión preventiva.

La demandante, no solo fue detenida en forma ilegal, sino que juzgada y condenada en un procedimiento ajeno a las más básicas garantías del debido proceso, sometida a interrogatorios bajo tortura física y psicológica, donde las pruebas de los supuestos delitos imputados, fueron aportadas por la Central Nacional de Informaciones, órgano parapolicial que actuaba como brazo armado de la Dictadura Militar, estrechamente ligado a la Fiscalía Militar de Valdivia, cuyo personal impulsó este viciado



procedimiento ante los Juzgados del Crimen de esta ciudad, que en ese entonces, ajenos a cualquier tipo de independencia, atendido su sometimiento al régimen dictatorial reinante en la época, no protegieron a la demandante de las terribles torturas que sufrió de parte de agentes del estado, no repararon en la ilegalidad de un procedimiento con prueba constituida bajo torturas.

La prisión política, el secuestro y las torturas de la cuales la Sra. Beatriz fue víctima por parte de agentes del Estado, generó en ella daño psicológico irreparable, todo lo cual consta en informes PRAIS organismo público dependiente del Servicio de Salud de Valdivia, y demás antecedentes comprendidos en la carpeta remitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la demandante, todo lo cual es constitutivo de un daño moral que necesariamente debe ser plena e íntegramente reparado por el Fisco de Chile.

Por otro lado, el daño sufrido por la demandante tuvo un aspecto patrimonial, ya que producto de la prisión política, tortura sufrida y salida intempestiva del país como condición para ser puesta en libertad, la Sra. Beatriz vio dificultado su desarrollo profesional y laboral, generado menoscabo económico permanente.

De los antecedentes expuestos se concluye que la demandante fue objeto de secuestro, tortura y apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado de Chile, todo lo cual lo transforma en víctima de un crimen contra la humanidad, todo lo cual genera responsabilidad del Estado de Chile que debe necesariamente ser reparada.

El Derecho

1.- Frente a los masivos casos de detención política ilegal, torturas y todo tipo de apremios ilegítimos cometidos por agentes del Estado en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990, es que el año 2003 el Presidente de la Republica Ricardo Lagos Escobar, realiza su propuesta “No hay Mañana sin Ayer”, donde propone investigar y acreditar los casos de prisión política y tortura cometidas de ese oscuro capítulo de nuestra historia reciente.

2.- Es así como el 11 de noviembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial el DS N° 1.040, por el cual se creaba la “Comisión Nacional sobre



Prisión Política y Tortura” para el esclarecimiento de la verdad acerca de estos graves crímenes contra la humanidad ejecutados en contra de chilenos por parte de agentes del propio estado de Chile, este decreto establecía que, en un plazo de seis meses a contar de esa fecha, la Comisión debía determinar quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, plazo que luego se prorrogó.

3.- Entre los fundamentos de este decreto se indica que “cualquier intento de solución del problema de los derechos humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones”; que “muchas de esas personas no han sido hasta la fecha reconocidas en su carácter de víctimas de la represión, ni han recibido reparación alguna por parte del Estado”, y que “sólo en la medida que se esclarezca completamente la verdad, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro”.

4.- Tanto en la propia Constitución Política del Estado en su artículo 19 N° 1 y 7 como en múltiples tratados internacionales ratificados por Chile y que en virtud de lo establecido en el artículo 5 inciso 2° de la misma carta fundamental, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, el Estado de Chile y sus agentes deben asegurar a todos los habitantes del territorio el derecho a la integridad física y síquica como su libertad personal, por lo cual revisten especial gravedad los hechos de autos donde consta que agentes del estado atentaron contra estos derechos respecto de la demandante.

5.- Entre otros convenios donde se reconocen estos derechos a la integridad física, psíquica y libertad personal que han sido ratificado por Chile Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política, el Código Penal, el Código de Justicia Militar; la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.



6.- Específicamente respecto de la tortura, el Informe Valech, señala que esta constituye una brutal forma de violación del derecho a la integridad personal y se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”, en el mismo se infirme e indicándose que otra definición señala que se considera tortura “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

7.- En relación con este delito la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su parte, señaló en 1975 que la tortura “constituye una forma agravada y deliberada de pena o trato cruel, inhumano o degradante”.

8.- Finalmente la Comisión Valech, adoptó una definición operativa en la que incorpora elementos de ambas convenciones: “Constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan



cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia”.

9.- Sin perjuicio de lo expuesto, el secuestro y las torturas sufrida por la demandante de parte de agentes del estado debo agregar que los hechos descritos son constitutivos de los delitos contemplados en los artículos 141 y 150 A del Código Penal, por cuanto todos los querellantes fueron secuestrados sin orden judicial alguna, mantenidos en un recinto de detención y sometidos a feroces torturas, por personas vestidas de civil que no se identificaron como agentes del estado y sin imputación de cargos.

10.- En relación con lo expuesto el artículo 141 del Código Penal establece que “El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio.

Si en cualquiera de los casos anteriores, el encierro o la detención se prolongaren por más de quince días o si de ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo.

El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación, violación sodomítica o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1, en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

11.- Por su parte el artículo 150 A del Código Penal establece que “El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.



La misma pena se aplicará al particular que, en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación de un empleado público, o con el consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutare los actos a que se refiere este artículo.

Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.

12.- Los delitos de secuestro y torturas, fueron cometidos por agentes del Estado dentro de un plan sistemático de represión y aniquilación a la resistencia política y especialmente de quienes intentaban una resistencia armada, por parte de la Junta de Gobierno y sus aparatos represivos. Las características de estos crímenes los constituyen en crímenes de lesa humanidad, por lo que no pueden ser objeto de prescripción.

13.- Ciertos delitos o crímenes por su particular y excepcional gravedad agreden y hieren no solamente a sus víctimas, sino también a la conciencia misma de la humanidad. Violan principios que deben regir la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que han sido calificados como crímenes de Lesa Humanidad. Las consecuencias prácticas



de una tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor la prescripción. La tortura y el secuestro, ha sido considerada un crimen de Estado, en especial cuando constituye una indebida práctica gubernamental o de agentes del Estado, con el fin de eliminar la disidencia política o deshacerse de disidentes políticos u opositores.

14.- Los crímenes contra la humanidad pueden ser ejecutados en conflictos internacionales, al interior de un conflicto interno o en tiempos de paz. La teoría de los crímenes de Lesa Humanidad surgió para sancionar aquellos hechos no constitutivos de delitos contra la paz o crímenes de guerra y que, por su particular gravedad, vasta escala, manera organizada, sistemática de comisión, ofendieran a la humanidad misma, es decir, al hombre colectivo.

15.- La comunidad internacional ha estimado que crímenes tan atroces como estos, son siempre punibles, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde su comisión, debiendo ser perseguidos los responsables en cualquier tiempo y donde quiera que se encuentren, ya que con ello se contribuye más efectivamente a sus principales fines, la paz y seguridad mundiales, y el respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos más esenciales. Por ello, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad de fecha 26 de noviembre de 1998. “Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave”.

“Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacional”.

16.- El artículo 1º de la Convención declara imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra. Según la definición del Estatuto del Tribunal de Nuremberg, los principios de derecho internacional de



Nuremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición del Estatuto del Tribunal de Nuremberg, los principios de Derecho Internacional de Nuremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio. El artículo 2º declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del estado y a particulares ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquier sea su grado de desarrollo. En el artículo 3 y 4 las partes se obligan a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para hacer posible la extradición y para que la prescripción de la acción penal o de la pena no se aplique a estos crímenes.

17.- Toda una reglamentación de carácter consuetudinario, y legal, así como resoluciones de Naciones Unidas y OEA contribuyen, desde lo normativo, a calificar de crímenes contra la humanidad aquellos actos que se enmarca en una política sistemática de exterminio de un grupo humano en violación a sus Derechos Humanos. Cuando el Estado despliega una práctica sistemática de persecución y exterminio de grupos, o personas, en desprecio a normas internacionales que se ha comprometido respetar, hay un germen de crimen de lesa humanidad.

18.- Los hechos ilícitos que motivan la presentación de esta demanda, deben ser considerados crímenes contra la humanidad por las características con las que fueron llevados a cabo y por el conjunto de bienes jurídicos que afectaron. Estos hechos formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra un grupo de población civil y sus ejecutores tenían conocimiento de que se estaba llevando adelante dicho ataque. Estos requisitos, están señalados en el art. 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y son los requeridos por la nueva jurisprudencia en la materia que están produciendo los Tribunales Internacionales Ad - Hoc para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, para considerar a un hecho ilícito un crimen contra la humanidad (cfr. del Tribunal para Ruanda el caso “The Prosecutor vs. Jean Paul Akayesu”, sentencia del 2 de septiembre de 1998,



parágrafos 578 y ss, publicado en www.icty.org; del Tribunal para la Antigua Yugoslavia caso “Prosecutor vs. Dusko Tadic”, sentencia del 7 de mayo de 1997, parágrafos 624 y ss; y de la Sala de Apelación del mencionado Tribunal “Prosecutor vs. Tadic”, sentencia del 15 de julio de 1999, parágrafo 271, estos últimos publicados en www.icty.org). Sobre los bienes jurídicos afectados por los crímenes contra la humanidad (o crímenes de lesa humanidad) el Tribunal Internacional Ad Hoc para la ex Yugoslavia en el caso “Erdemovic” sostuvo:

“Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo.

Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima” (ver “The Prosecutor v.s Drazen Erdemovic”, sentencia del 29 de noviembre de 1996, parágrafo 28).

19.- En relación con lo expuesto, la Constitución Política de la República, en su artículo 38 inciso segundo establece que *“cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”*

20.- Por su parte la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 4º establece que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicios de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.*

21.- Por lo expuesto es que en virtud de lo establecido en las normas ya citadas y en los artículos 2.314 y siguientes de Código Civil, y en especial del 2.320 del mismo cuerpo legal, en cuya virtud demando la



responsabilidad civil del Estado de Chile por el secuestro calificado y desaparición del padre de mis representados.

22.- En efecto, la oportunidad del ejercicio de esta acción civil, se sustenta además en que la prisión política y tortura de estos autos, no reviste el carácter de un delito común, sino que el carácter de crimen contra la humanidad, todo en virtud de lo dispuesto en las normas de derecho internacional ya citadas previamente también resultan relevantes los Convenios de Ginebra sobre Trato a los Prisioneros de Guerra y a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra publicados en Diario Oficial el 18 de abril de 1951 y el 12 de agosto de 1950 respectivamente, específicamente a lo estipulado en el artículo 3° de ambos cuerpos normativos, en cuya virtud “En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

Las Personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, detención o cualquiera otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto queda prohibido, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas:

a.- los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles. Torturas y suplicios;

b.- la toma de rehenes:

c.- los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d.- las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provistos de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.



23.- La aplicación de los convenios de Ginebra, a estos casos obedece a múltiples actuaciones y manifestaciones tanto expresa como tacitas de la Junta Nacional Gobierno, altos mandos militares de la época y personeros civiles de dicho régimen de ipso, quienes se encuentran contestes en que entre septiembre de 1973 y 1976 existía en Chile una situación de guerra interna, a partir de la declaración del Estado de sitio como medida de excepción constitucional a lo largo del territorio nacional que supuso la introducción de procedimientos penales de tiempos de guerra regulados por el título III del Libro Primero, artículos 71 y siguientes del Código de Justicia Militar, situación que se ve refrendada por carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante 1974 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citada por el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III pagina 168, donde señala que *“... en relación a los delitos sometidos a la jurisdicción militar, no procede el recurso de habeas hábeas, como consecuencia de hallarse el país en estado de sitio, el que, en conformidad al Decreto Ley N° 5, equivale a estado o tiempo de guerra ...”*.

24.- Por lo indicado, los delitos de esta demanda constituyen infracciones graves a los citados convenios de Ginebra y por lo mismo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, situación de enorme relevancia, por cuanto su persecución y castigo se funda en principios de derecho internacional general que forman parte del derecho internacional positivo según señala el profesor Santiago Benadava en su trabajo Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica, pagina 212. El ya citado principio tiene su origen en los juicios de Nuremberg y de Tokio instruidos para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, así el contenido de las cartas de estos tribunales y las sentencias que de ellos emanaron, principios que fueron recogidas y reafirmados por la Asamblea General de la O.N.U. En efecto, la ya indicada Asamblea General aprobó en 1968 una convención sobre sanciones de los crímenes de contra la humanidad, declarando que es irrelevante para el orden internacional que exista una legislación en contrario; por otro lado, en 1968 se suscribe convención que establece imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y



contra la humanidad, ratificada el año 1973 por la Resolución N° 3074 de la misma entidad, disposiciones todas vinculantes para Chile atendido su carácter de integrante de la Organización de las Naciones Unidas.

25.- Según señala el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III, pagina 36, son crímenes de guerra “... las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que incluyen.... el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra...”, como ocurren en los casos que nos ocupan.

26.- La imprescriptibilidad de este tipo de crímenes tiene en cuenta además el especial contexto histórico en que se cometieron, toda vez que fueron ejecutados por agentes de un régimen de facto, que tal como se ha demostrado en reiteradas causas sobre violaciones a los derechos humanos ventiladas ante los tribunales de la República, donde se practicó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con lo que la sensación de impunidad y temor existente en la población de la zona y el país constituía una realidad que se debe tener presente al fallar esta causa.

27.- En relación con lo antes indicado, los Estados Americanos, entre ellos el nuestro, al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y asumir entre otros, los deberes que le impone su artículo N° 1, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contraído la obligación general de proteger, respetar y garantizar cada uno de los derechos del pacto con lo que *“el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación...”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988).

28.- Una eventual declaración de prescripción de la acción civil en autos, no resultaría acorde con el deber asumido por el Estado de Chile ante la comunidad internacional, no solo a partir de lo establecido en la disposición señalada en el número anterior, sino que en los ya citados convenios de Ginebra, en su artículo 148 señala que *“ Ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra parte*



contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u otra parte contratante, respecto a las infracciones previstas en el artículo anterior....” (Infracciones graves como la señalada en el artículo 3º del Convenio).

29.- En relación con lo expuesto, los tribunales superiores de justicia desde los años 2005 y 2006 han dictado diversos fallos que se inclinan por la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como el que nos ocupa en esta demanda, es así como en relación con los homicidios de Hugo Rivol Vásquez Martínez, Mario Superby Jeldres y José Matías Ñanco, en las causas rol 559-04 y 266-04 de la Exma. Corte Suprema se ha señalado que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra deriva de principios de derecho internacional general que desde la década de los 70 son parte de nuestro ordenamiento jurídico.

30.- Frente a este punto debemos agregar que, respecto del daño moral, generado en nuestro representado a partir de los hechos descritos, nuestra jurisprudencia ha sostenido que: *“a diferencia de lo que ocurre en materia patrimonial, el daño moral no necesita ser acreditado, por lo cual, demostrada la trasgresión del derecho subjetivo, debe tenerse por probada la existencia misma del daño moral”*. Como se ha sostenido, “El daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre por un hecho externo que afecta la integridad física y moral del individuo. Por lo tanto, la apreciación pecuniaria de ese daño debe considerarse por entero sometida a la estimación discrecional del juez, ya que dada su índole es incurso que no puede ni requiere ser acreditada”. “El daño moral por el carácter espiritual que reviste no debe ser fundamentado ni probado, correspondiéndole al juez apreciarlos prudencialmente de acuerdo al mérito del proceso y a las reglas de equidad”. “Nuestros tribunales han establecido una nítida diferencia entre los perjuicios patrimoniales o no patrimoniales, pues mientras respecto de los primeros se exige una acreditación completa y exigente, en cuanto a los segundos ella es preferida al entenderse que, dada su naturaleza, la prueba es imposible”.



33.- Criterios y factores a considerar para la evaluación del daño moral:

a. “entidad, naturaleza y gravedad del suceso que causa el daño, la clase del derecho extrapatrimonial agredido, las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o morales que derivan del daño causado, su duración y persistencia en el tiempo y la capacidad económica de las partes”.

b. “La naturaleza, especie e intensidad de la lesión, las condiciones personales de la víctima, su entorno familiar y social, su actividad laboral, buen nombre o reputación”

c. “Los jueces están facultados para apreciar discrecionalmente el daño moral sufrido por la víctima, dada su índole netamente subjetiva, que encuentra su fundamento en la naturaleza afectiva del ser humano”.

d. “Hacen excepción a esta regla de onus probandi, los casos en que el daño moral no requiere de prueba en materia extracontractual, porque las circunstancias que rodean el hecho ilícito permiten presumir la existencia de tales perjuicios, como ocurre, por ejemplo, en los casos de muerte y lesiones”

e. “Numerosos fallos sostienen que en determinadas situaciones el daño moral no requiere de una acreditación por medios formales, ya que su ocurrencia se desprende de las circunstancias en las que ocurre el hecho y las relaciones entre los partícipes”.

f. “No era necesario rendir prueba alguna sobre la lesión del derecho subjetivo de los ofendidos con motivo de la muerte de sus hijos, hermanos, cónyuges y padres, respectivamente, en lo que consiste el daño moral, porque este no es de contenido patrimonial y, en consecuencia, no puede quedar sujeto a las mismas reglas aplicables a la indemnización de daño emergente y lucro cesante”.

g. “No se ha producido prueba suficiente para acreditar el lucro cesante demandado, por lo que solo podrá hacer lugar a lo pedido en cuanto al daño moral, el que evidentemente fue sufrido por los actores en forma directa y de manera indirecta por las personas que de él dependen o se le vinculan afectivamente, desde que ha de soportar de por vida un déficit físico-laboral de un elevado porcentaje, con el menoscabo económico y social consiguiente para él y su familia”.



h. “El daño moral debe ser reparado por el ofensor y no es necesario que se rinda prueba tendiente a acreditarlo, por cuanto es obvio que la pérdida de un ser querido produce aflicción y dolor en la víctima y los jueces del fondo están obligados a compensarlo en dinero”

Que por lo expresado, no habiendo una norma particular que regule específicamente la responsabilidad extracontractual del Estado, como lo hace el artículo 44 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, respecto de la generalidad de los órganos de la administración, necesariamente debemos volver a las reglas generales del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, esto es, por los artículos 2314 y siguientes, porque se trata de normas generales de indemnización de daños ocasionados y atendiendo que el Estado es una persona jurídica capaz de cometer delito o cuasidelito civil y, por lo mismo, está obligado a indemnizar los daños causados con dolo o culpa de las personas naturales que obren en su nombre o representación. Responsabilidad que nace de la misma naturaleza de la persona jurídica por un hecho personal, argumento que la doctrina ha aceptado cuando Pedro Pierry Arrau (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCII N° 2 página 26) señala que” la persona jurídica será personal y directamente responsable del daño que así se cause. El delito o cuasidelito de órgano es del delito o cuasidelito de la persona jurídica”.

34.- Acreditada la existencia de la prisión política y torturas a partir de la documentación acompañada, y que emana de un órgano creado por el Estado de Chile, es que constando el carácter de víctima de agentes del estado del actor , acreditada además la existencia de daños patrimoniales y morales que han recaído sobre el demandante, es necesario referirnos a la existencia de una relación de causalidad entre la prisión política y las torturas y los perjuicios alegados, en este sentido la doctrina administrativista se ha pronunciado a favor de la teoría de la causa adecuada, en cuya virtud, “no todas las condiciones necesarias para producir un resultado son equivalentes, sino que la causa adecuada es aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producirlo”.



35.- En estos autos se acreditará la existencia de esta relación de causalidad y del hecho evidente que la única causa basal de todos los perjuicios que afectan a la demandante, radica en la prisión política y tortura sufrida por él, como se ha expresado anteriormente.

Por estas consideraciones y disposiciones legales que cita, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenarlo a pagar la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos), con reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago o la suma que US., determine de acuerdo al mérito del proceso, con costas.

Al folio 6, con fecha 16 de mayo de 2022, se notificó al Abogado Procurador Fiscal en representación del Fisco de Chile.

Al folio 7 la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo en virtud de los siguientes antecedentes:

DE LA DEMANDA

El demandante invocando su calidad de víctima de apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, reconocida como tal por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, e incluido en el Listado de Prisioneros Políticos y Torturados, demanda al Fisco de Chile por la responsabilidad que tendrían agentes del Estado en la violación de sus derechos humanos y la necesidad de ser reparado por éste.

Reclama la suma de \$ 400.000.000 por el daño moral sufrido y, al efecto, describe las circunstancias, persecuciones e ilícitos a que fue sometido.

Invoca como fundamento normativo los artículos 5º, 6º, 7º, 19, 38 inciso segundo, 73 inciso segundo de la Constitución Política; 4º de la ley 18.575; tratados internacionales de derechos humanos, citando la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, entre otros, además de jurisprudencia judicial.

1.- RESPECTO A LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCBXXCVMPSX

Esta parte no discute que la actora forme parte del listado de víctimas de tortura de que da cuenta el Informe Valech.

Sin embargo, más allá de su inclusión en el referido informe, y en tanto no se nos presente la certificación oficial con el relato aceptado por la comisión que concuerde con lo sostenido en el libelo, esta parte no está en condiciones de aceptar que los hechos descritos en la demanda para fundar el daño cuya indemnización se reclama, hayan ocurrido de la manera que los narra la actora, ni tampoco puede esta parte reconocer la extensión y alcance de dichos hechos.

En consecuencia, la actora, a lo menos, deberá demostrar las particulares circunstancias que relata en la demanda.

2.- EXCEPCIÓN DE REPACIÓN.

Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

No resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior —y desde— lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

La complejidad reparatoria.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCBRXCVMPX

Como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a V.S. a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.



Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Es necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$ 992.084.910.400.-Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.



Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Reparaciones específicas.

Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso que nos ocupa, cabe señalar que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones.

En efecto, la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$ 1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

En este caso, el Instituto de Previsión Social (IPS), informa en oficio que se acompaña en otrosí, que la demandante figura calificada como víctima de Prisión Política y Tortura, por lo que le asiste derecho a los beneficios de reparación dispuestos en la Ley N° 19.992. Por ello, dicho Instituto le concedió pensión vitalicia de reparación, de cargo fiscal. El total acumulado a la fecha del mentado oficio, 26 de mayo de 2022, alcanza el millonario valor de \$36.348.225, considerando el monto mensual de la pensión.

Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de



diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$ 4.580.89213. Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de



la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Reparaciones simbólicas.

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias-, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.



Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, señala que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”.

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el



Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; la Escultura de la Mano, en calle Rubén Darío de esta ciudad, como la Casa de la Memoria, sita en calle Pérez Rosales, ex dependencia de la CNI en la misma Valdivia, Memorial en el Puente Estancilla, Memorial en el Cementerio todos en la ciudad de Valdivia, el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCBXCVMPX

los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo DomiĆ Bezic, Maja y otros con Fisco16 ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

DECIMO NOVENO: *“Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada”.*

En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: *“Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”.*

De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en



consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiere gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos.

En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien -como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera sea incompatible con los beneficios aludidos.

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.



Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)”.

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser



motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

En conclusión, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opongo la excepción de reparación por haber sido ya indemnizado la demandante de autos.

EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

En subsidio de la excepción de reparación alegada, opongo a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos.

Normas de prescripción aplicables.

Opongo la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato de la demandante, la detención, los apremios y torturas de que fue víctima, se produjeron entre los años 1986 y 1987.



Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 16 de mayo de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que SS., estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles.

“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”.



Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Fundamento de la prescripción.

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social.



Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de la acción ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Jurisprudencia sobre la prescripción.

La sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013.

Como es de público conocimiento, nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.



En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

Señala al respecto el fallo:

Octavo: “*Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia*”.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

Al efecto, el citado fallo dispone:

Cuarto: “*Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana*



de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991. ”

Quinto: “Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. ”

Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio. ”



Séptimo: *“Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.”*

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

Así, junto al considerando octavo antes citado, dispone el fallo en su considerando décimo que:

Décimo: *“Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto”.*

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Otros fallos de la Excma. Corte Suprema.

Además de lo anterior, existen numerosas sentencias en el mismo sentido, a partir del año 2007, que constituye jurisprudencia uniforme



respecto a la materia, y que por lo tanto han acogido la excepción de prescripción, en los términos planteados por esta parte.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Normas contenidas en el Derecho Internacional.

Finalmente, aun cuando la demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, mi parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.



La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema - que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación con esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.



Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile. Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

El planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país.

En efecto, la Excm. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar:

VIGESIMO QUINTO: *“Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.”*

VIGÉSIMO SEXTO: *“Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto*



del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables. Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada – basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso”.

En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, SS. no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Con el mérito de lo expuesto precedentemente SS., deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACION RECLAMADA.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procedo a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al cuantioso y exorbitante monto pretendido.

Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.



Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos,



con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En efecto, en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción de la acción deducida, esta parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, SS., debe considerar todos los pagos y beneficios recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión vitalicia, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

También es pertinente hacer presente a SS., que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

Finalmente, téngase por contestada la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Al folio 12, el demandante evacuó el trámite de la réplica.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCBXCVMPX

Al folio 14, la demandada evacuó el trámite de la dúplica.

Al folio 16, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

Al folio 21, se presentó observaciones a la prueba.

Al fojas 25, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fin de evitar repeticiones, se dan por reproducidos los escritos fundamentales de demanda y de contestación, así como la parte petitoria de los mismos.

SEGUNDO: Que, como ha señalado la Excma. Corte Suprema (rol N° 13.699-15), las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la *reparación íntegra* en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos y queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de ese hecho. Éstas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales nacionales en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.



TERCERO: Que, en efecto, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho internacional de los *Derechos Humanos*, estatuto normativo reconocido por Chile, que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

En consecuencia, no resultan aplicables las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el Fisco demandado, pues ellas contradicen, como se dijo, la normativa internacional.

Así las cosas, se rechazará la excepción de prescripción extintiva, alegada de forma subsidiaria por la demandada, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

CUARTO: Que, como se dirá en lo resolutivo, también se rechazará la excepción de reparación, alegada como excepción principal, fundada en que el actor ya fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación de la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, y en virtud de la Ley N° 19.980, pues ello contradice la normativa internacional antes señalada y porque el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional.

La normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión.

QUINTO: Que el *daño moral* es la lesión o agravio, efectuado



culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de los daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. El menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y por su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial, sobre la base de presunciones, especialmente, habida consideración de aspectos tales como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado.

SEXTO: Que para acreditar los fundamentos de su acción, el demandante rindió prueba documental, legalmente acompañada y no tachada, consistente en:

1. Certificado de nacimiento de doña Beatriz Gudrun Brinkmann Scheihing.
2. Informe psicológico emitido por la psicóloga Ximena Paz Herrera García del Programa PRAIS dependiente del Servicio de Salud de Valdivia.
3. Carpeta de prisión Política de Pedro Enrique Mella Contreras en copia íntegra de carpeta entregada por el Instituto Nacional de los derechos Humanos, donde consta prisión política de la demandante.
4. Nómina de Personas reconocidas como víctimas por la comisión de Prisión Política y Tortura del estadio de Chile de la demandante, figura con el N°3.437.

Igualmente, al folio 20 se rindió prueba testimonial con los dichos de los testigos Julia Tatiana Agüero Zaffaroni y Carlos Alfonso Morilla Castro, quienes legalmente examinados y no tachados declararon:

Agüero: Al punto uno de la interlocutoria de prueba, señala que la actora sufrió un daño irreparable por su detención, prisión y tortura, atribuida a agentes del Estado. Hechos que lo configuran, la testigo declara: yo la visité en la cárcel Isla Teja a Beatriz alrededor del año 1986 y estaba



muy afectada físicamente y perturbada psicológicamente, se notaba que había sido torturada, perdió su trabajo, fue exiliada luego de estar en la cárcel, lo paso muy mal. Éramos compañeras de trabajo en el Colegio Alemán y además teníamos un grado de amistad en común.

La parte demandante repregunta a la testigo para que señale: Si tiene conocimiento sobre qué organismo del Estado practicó la detención la señora Beatriz Brinkmann.

La testigo declara: La Central Nacional de Informaciones (CNI), primero estuvo privada de libertad en el cuartel que tenían en Calle Pérez Rosales y luego trasladada a la cárcel de Isla Teja.

La parte demandante repregunta a la testigo para que señale: Que efectos físicos, psicológicos y laborales sufrió doña Beatriz Brinkmann.

La testigo declara: Recuerdo que casi le vuelan el ojo, la voz la perdió casi totalmente, estaba muy amoratada y castigada físicamente. Respecto de los efectos laborales, ella perdió su trabajo inmediatamente.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba, señala que de todas maneras, ya que, en primer lugar se quedó sin trabajo y además quedó con secuelas que perduran hasta los días de hoy, como son: La pérdida casi completa de su voz, problemas oculares en uno de sus ojos y con traumas de tipo psicológicos.

La parte demandante repregunta a la testigo para que señale: La relación causa efecto que hay entre las torturas que ella sufrió con la personalidad que hoy presenta.

La testigo declara: Ahora está dedicada sólo a producir miel en el lugar donde vive actualmente y está alejada de todas las demás personas, además le cambió su vida ya que, dejó de ejercer su profesión, nunca más volvió a trabajar en un colegio como consecuencia del episodio que sufrió.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba, señala que es totalmente procedente, dado las consecuencias con las cuales se vio afectada, pérdida del trabajo, pérdida casi total de su voz, problemas oculares en uno de sus ojos, sumado a todos los golpes que sufrió durante su detención.

Morilla: Al punto uno de la interlocutoria de prueba señala, lo que yo supe es que Beatriz fue detenida por agentes del Estado y apresada en una dependencia de la ciudad de Valdivia, de esto me enteré a través de la



prensa al ver la primera plana una fotografía de Beatriz y una bajada de título en la que se afirmaba que había sido detenida por actividades terroristas. Meses más tarde, yo pude visitarla en la cárcel de Valdivia junto a los profesores alemanes y chilenos, nos constituimos ahí para conocer lo que había sucedido y pude constatar en forma inmediata que su voz que antes del presidio había sido una voz clara de un volumen que le permitía desempeñarse como profesora de idioma extranjero, ya no era la misma, esto producto de las condiciones en la que ella había vivido en los meses anteriores y probablemente producto de las lesiones y torturas que había vivido, lo que nos llamó la atención a los profesores presentes, lo cual comentamos posteriormente era que el instrumento laboral más importante que tiene un profesor como es la voz, en el caso de Beatriz estaba altamente dañada.

La parte demandante repregunta al testigo para que señale: Si percibió en doña Beatriz Brinkmann alguna secuela física, psicológica y laboral posterior a la detención de cual fue objeto.

El testigo declara: Beatriz como profesora de alemán siempre estuvo dispuesta a responder mis consultas relacionadas con el aprendizaje de esta lengua, idioma que no conocía al llegar a Valdivia y que mi interés particular me motivo a iniciar su aprendizaje, de esta manera fueron repetidas las ocasiones en que ella respondió a mis consultas, no solamente con una habilidad pedagógica, sino que también con una voz clara y firme, ya que ella dominaba perfectamente la lengua alemana como el idioma castellano. Esa característica de voz fuerte y firme se advertía en esa visita que hicimos a la cárcel que ya no existía y, que incluso en conversación con un pequeño grupo era difícil comprender por su bajo tono de la voz.

Algunos años después en el año 1989, en el mes de enero, varios años después de su detención, de sus apremios y de sus torturas, pude encontrarme con ella en Alemania, en esa ocasión constaté que a pesar de haber transcurrido tres años de su detención ella aún mantenía esa afección a la voz. Posteriormente en el año 2018 me encuentro casualmente con Beatriz en una actividad cultural en donde pude constatar una vez más su dificultad.

A Beatriz la caracterizaba como profesional su gran seguridad en la



materia que dictaba, esto es, el idioma alemán consciente que sus capacidades le daban la autoridad suficiente para desempeñarse profesionalmente, esto sin duda era una característica de Beatriz, la que podría definirse como seguridad en sí misma. En todos los encuentros posteriores a su detención, era evidente que esa seguridad, autoconfianza no estaba presente, ya que, se mostraba como una mujer introvertida, insegura y muy lejos de la imagen de una profesional que confía en sus capacidades.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba, señala que un profesional que se ve impedido de desempeñarse en su actividad laboral, la cual ha ejercido con entusiasmo, convicción y gran seguridad, al verse impedido de continuar con una carrera exitosa, sin duda que constituye un grave daño que la acompañará en toda su edad laboral, que si consideramos el tiempo que ella no ha ejercido, al menos serían 30 años de actividad laboral exitosa. De todo eso fue privada Beatriz, por lo tanto resultan plenamente procedentes los perjuicios reclamados.

SÉPTIMO: Por su parte, la demandada rindió prueba documental consistente en el ORD, DEGST N° 4792-7111 del IPS, el cual informa que los beneficios de reparación entregados a Beatriz Gudrun Brinkmann Scheihing al alcanzan a la suma total de \$36.348.225 al mes de mayo de 2022.

OCTAVO: En cuanto al *daño moral* solicitado, la testimonial rendida da cuenta, en síntesis, de la existencia y entidad del daño psicológico, familiar y social relacionado con su detención, encarcelamiento y malos tratos sufridos.

NOVENO: Que, la prueba documental rendida, en especial, el informe practicado por la psicóloga (PRAIS) Ximena Paz Herrera García, arriba al siguiente diagnóstico y conclusiones: *"[...]En el aspecto psicológico propiamente tal, presentó varios síntomas, que la han llevado a consultar a especialistas del área de la salud mental, asociados a cuadros de estrés agudo, y depresión, que generan pérdida importante de peso, angustia, tristeza, desmotivación generalizada. Estuvo en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Estos síntomas, se han presentado en más de una oportunidad a lo largo de su vida, como posible configuración de un estrés post*



traumático tardío.

Otro de los signos evidentes de las consecuencias de la experiencia de tortura, fue la afonía crónica, que se presentó por estrés agudo. Beatriz manifiesta que ha consultado especialistas de la Fonoaudiología, quienes apoyaron el proceso de recuperación parcial de la voz, pero que no regresó a tener la fortaleza de antes. Efectivamente su voz es de bajo tono, e indica que, una de las explicaciones que se le dieron por expertos, es que la musculatura que trabaja para que las cuerdas bucales se expandan y contraigan y generen el sonido, sufrieron el impacto, y no responden de la manera que debiesen.

Esto se presentó siendo joven, por lo que otra de las consecuencias se relaciona con el Proyecto de vida.

Beatriz se proyectaba como docente, se había especializado en la materia y es hasta el día de hoy, una de sus pasiones. Este proyecto vital se vio mermado producto de la afonía de carácter psicógena, que coartó su desarrollo y cumplimiento del plan por el cual había trabajado y estudiado. Sólo puede ejercer en grupos pequeños o de lo contrario, su voz no es escuchada.

Su familia, también sufrió el impacto emocional y social, de haber sido privada de libertad, pues son excluidos de los grupos de pares con los que tenían relación y sentido de pertenencia, además, luego de su liberación, debe irse a Alemania, vivenciando nuevamente la distancia física con su grupo familiar nuclear.”

Por tanto, la vivencia de sufrimiento por la privación de libertad y malos tratos es constitutivo de daño moral o extrapatrimonial.

DÉCIMO: Así, por otra parte, con el análisis de los medios de prueba valorados en los fundamentos anteriores permiten dar por acreditada la existencia y entidad del daño moral.

En consecuencia, se le otorgará prudencialmente al demandante la suma de cuarenta millones de pesos.

UNDÉCIMO: Que la demás prueba rendida en nada altera las conclusiones a que se ha arribado con precedencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 5º, 6º y 38 de la Constitución Política de la República; los



artículos 1.1., y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1698 del Código Civil, 144, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que **SE RECHAZAN** las excepciones perentorias de reparación y de prescripción extintiva de la acción opuesta por la demandada.

II.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta al folio 1 por doña **BEATRIZ GUDRUN BRINKMANN SCHEIHING** en contra del **Fisco de Chile**, representado por el abogado procurador fiscal don Natalio Vodanovic Schnake, y, en consecuencia, se condena al **Fisco de Chile** a pagar la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) al demandante.

III.- Las cantidades ordenadas pagar a cada uno de ellos se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y devengará intereses desde que el deudor se constituya en mora en el pago de la suma fijada en la sentencia.

IV.- No se condena en costas a la demandada por gozar del privilegio de pobreza.

Regístrese, notifíquese por cédula y consúltese si no se apelaré.

Rol C-578-2022.-

Redacción de don EDINSON LARA AGUAYO, Juez Titular;
autoriza doña Cecilia Matamala Kroell, Secretaria Subrogante.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, se incluyó en el estado diario la sentencia precedente. Valdivia, a veintitrés de diciembre del año dos mil veintidós.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCBXCVMPX